



Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0)

This is a human-readable summary of (and not a substitute for) the [license](#). [Advertencia.](#)

Usted es libre de:

Compartir — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato

Adaptar — remezclar, transformar y construir a partir del material

La licenciente no puede revocar estas libertades en tanto usted siga los términos de la licencia

Bajo los siguientes términos:



Atribución — Usted debe dar [crédito de manera adecuada](#), brindar un enlace a la licencia, e [indicar si se han realizado cambios](#). Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciente.



NoComercial — Usted no puede hacer uso del material con [propósitos comerciales](#).

No hay restricciones adicionales — No puede aplicar términos legales ni [medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia](#).

Implicaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz del acuerdo realizado en el año 2016 en el contexto de las víctimas del conflicto y la justicia colombiana¹

Miguel Sebastián Cadena Duarte²
Universidad Católica de Colombia

Resumen

Durante los diálogos de paz en la Habana, Cuba, impulsados por el Gobierno de Colombia, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia FARC-EP, se dio paso a uno de los momentos coyunturales más significativos en la historia republicana del país y una esperanza para las víctimas del conflicto. De ese modo, el país vio la necesidad de terminar el conflicto armado y la ola de violencia que ha perdurado por más de cinco décadas, con la búsqueda de la construcción de una paz estable y duradera que permita la reparación de aquellos que han sido víctimas de la violencia en el país.

Así pues, a través del desarrollo de las conversaciones se plantearon varios puntos a tratar como son la reforma agraria, la participación política, el fin del conflicto armado, las drogas ilícitas, las víctimas que ha causado y la implementación de los acuerdos. En este artículo de investigación se profundiza en el último punto mencionado, realizando un análisis detallado de la creación de una jurisdicción especial para la investigación de los delitos cometidos por miembros de las FARC-EP en el transcurso del conflicto, y de qué manera esto puede afectar los aspectos de la Justicia en Colombia (Fundación Internacional Baltasar Garzón, 2016).

Las conclusiones obtenidas del estudio legal y constitucional que se realizó del acuerdo sobre justicia plasmado en el Acuerdo Final, denominado “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, evidencian el cambio de paradigma en la aplicación de la justicia en el posconflicto en Colombia. A su vez, permiten saber

cómo la Jurisdicción Especial para la Paz influye en la aplicación de esta y cuáles son sus implicaciones en la justicia colombiana.

Palabras clave: Proceso de Paz; Víctimas; Justicia Transicional; Paz en Colombia; Verdad; Derechos Humanos; Justicia Restaurativa; Reparación; Amnistía; Indulto.

Implications of the Special Jurisdiction for Peace of the 2016 agreement in the context of the victims of the conflict and justice Colombian

Abstract

The peace talks in Habana - Cuba, promoted by the Government of Colombia under the leadership of Juan Manuel Santos and the Revolutionary Armed Forces of Colombia FARC-EP, gave way to one of the most significant conjunctural moments in the republican history of the country, and a hope for the victims of the conflict where it became visible the need to reach the end of this internal situation that has remained latent for nearly five decades and has left a number of victims of all kinds.

Through the development of the conversations, several points were raised to be dealt with such as agrarian reform, political participation, illegal drugs, the end of the conflict and the victims it has left behind, as well as the implementation of these agreements. Through this research article we will go deeper into the last point mentioned of a special jurisdiction for the investigation of crimes committed by members of the FARC-EP in the course of the conflict and how it may affect the aspects of justice in Colombia.

According to the legal and constitutional analysis carried out on the Justice agreement of the general agreement for the end of the conflict and the construction of a stable and lasting peace, the implications and conclusions obtained point to making visible the change in the paradigm for the application of justice in post-conflict times and in another sense to knowing how the special jurisdiction for peace and the implications for Colombian justice are influenced.

Keywords: Peace Process; Victims; Transitional Justice; Peace in Colombia; True; Human rights; Restorative Justice; Repair; Amnesty; Pardon.

Sumario

Introducción. I. Contexto histórico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el año 2016. II. Jurisdicción Especial para la Paz y las víctimas Jurisdicción. III. Fundamentos Constitucionales: implementación jurídica del acuerdo final para la paz III.I Amnistía e indultos, y amnistía en las escuelas positivistas, marco jurídico internacional y constitucional. IV Implicaciones en la justicia respecto a las víctimas del conflicto entre los años 2012 y 2016 y reflexiones finales. V. Conclusiones. Referencias bibliográficas.

Introducción

Después de que la Corte Constitucional de Colombia no diera vía libre a un tercer mandato presidencial de Álvaro Uribe Vélez, el 7 de agosto de 2010 llegó a la presidencia de la República de Colombia Juan Manuel Santos Calderón, quien había sido su ministro de defensa (2006-2009) y autor de varios golpes asestados a la guerrilla de las FARC, en los que varios de sus miembros más importantes fueron dados de baja, así como el desmantelamiento de diversas estructuras pertenecientes a ella, logrando la inestabilidad militar de dicha organización.

En los primeros meses su mandato tomó un rumbo distinto al de su antecesor. En lo concerniente a las relaciones internacionales, restableció diálogos con el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, también con el presidente de Ecuador, Rafael Correa, con quien tenía un pleito judicial derivado de la operación en la que fue dado de baja Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, además de otros mandatarios que no compartían los lineamientos políticos de Uribe Vélez.

Para el descontento de la mayoría de los colombianos, quienes veían en Juan Manuel Santos un sucesor digno de representar y de dar continuidad a las decisiones y políticas de Uribe Vélez, este empezó a dar muestras de ser un estratega político en el manejo de asuntos trascendentales para la vida pública como lo era la lucha contrainsurgente, la acentuación de la apertura económica y el manejo de la institucionalidad encaminada a fijar políticas neoliberales para estas.

En lo referente a la lucha contrainsurgente, se hizo visible el recrudecimiento de las prácticas de guerra, tanto desde el poder estatal en cabeza de las Fuerzas Militares de Colombia, como de los grupos insurgentes alzados en armas, aunado a los efectos que trajo consigo la desmovilización de grupos paramilitares con la Ley 975 de 2005, también llamada Ley de Justicia y Paz, quienes a través del tiempo fueron integrando organizaciones criminales denominadas

“bandas criminales” o BACRIM, y que utilizan como combustible de financiamiento uno de los problemas estructurales que afecta a la sociedad colombiana desde los años 70: el narcotráfico (Alvis, 2019).

Entonces, para dar marcha atrás a los efectos producidos con la unión de estos factores que cada día se tornaban más difíciles de tratar y que daban cuenta del desgaste de la institucionalidad, como una cadena de sucesos en las que se debían adoptar reformas de fondo, el presidente Santos empezó la búsqueda de la terminación del conflicto con las FARC-EP, mediante una política de Estado, conformando un cuerpo de reconocidos juristas y personajes de la vida pública colombiana, para que llevara a cabo una agenda rigurosa del desarrollo de las conversaciones.

En primer lugar, la fase exploratoria se dio en el marco de una agenda cerrada y que dio lugar a lo que en un primer momento se denominó “Acuerdo General Para la Terminación del Conflicto”. En segundo lugar, una vez hecho público el proceso, se llevaron a cabo las negociaciones sobre los diferentes puntos establecidos en el acuerdo general, produciendo diferentes avances en la visión de un nuevo pacto centrado en la necesidad de generar confianza en la sociedad y, sobre todo, dar impulso y garantías a los nuevos retos que imponían los acuerdos.

Uno de los puntos tratados en el acuerdo a los cuales se le otorgó, no sin menos, una gran importancia fue el relacionado con las víctimas y las exigencias de verdad, justicia y reparación que estas reclamaban por medio de las solicitudes que le realizaban al Estado colombiano. Este fue el elemento central del proceso y la razón de llevar a buen término el fin de los diálogos e iniciar la construcción de paz con garantías para todos, y que se trata con más detalle en el presente estudio, con miras a desvelar la incidencia de este en la justicia colombiana (Alvarado et al., 2016).

I. Contexto histórico del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera en el año 2016

El 24 de agosto de 2016, en Colombia, pasó a ser la fecha en la que se hizo posible confirmar con certeza que se había llegado a un acuerdo final para la terminación del conflicto colombiano, después de seis años de conversaciones divididas en diferentes etapas, tratando al pie de la letra los puntos establecidos para este. Dichos puntos fueron seis, siguiendo la hoja de ruta establecida en su orden:

(i) **Reforma Agraria Rural Integral**, dado a conocer el 26 de mayo de 2013, lo cual estableció una solución al problema estructural del uso de la tierra que se ha dado en Colombia, en razón a su naturaleza rural y que ha sido una de las causas de la violencia y el alzamiento en armas de grupos de campesinos que demandan transformaciones serias para las condiciones de estabilidad y desarrollo en el campo por parte de los gobiernos. Lo acordado en este punto coincide, en gran parte, con los principios establecidos mediante la Carta Política de 1991, en lo que respecta a los fines del Estado sobre promover la prosperidad general, la protección de los bienes para el cumplimiento de los deberes sociales y el derecho al trabajo y a la propiedad privada, fundamentales en un Estado social y democrático de derecho.

(ii) **Participación política**, dado a conocer el 6 de noviembre de 2013, generó una de las reivindicaciones más claras de la Constitución Política, que pretende proponer espacios de participación en el manejo y la administración de las funciones del Estado; todo dentro del marco de ampliación de la democracia, el pluralismo, las garantías a la oposición, la veeduría ciudadana y la planeación democrática más equitativa para todos los sectores político y las organizaciones sociales. Esto permite lograr una erradicación del vínculo entre armas y política que se originó con ocasión al cierre de posibilidades de participación establecidas en el Frente Nacional, entre los tradicionales partidos Liberal y Conservador.

(iii) **Fin del conflicto**, dado a conocer el 25 de agosto de 2016, uno de los puntos con más acompañamiento internacional derivado de la confianza depositada, en el entendido de dar claridad y transparencia a uno de los procesos fundamentales en los procesos de paz. El objetivo del conflicto además de estar acompañado de la dejación de las armas, el cual evitaría la continuidad de la violación masiva de los Derechos Humanos y el sistemático uso de la violencia tanto del Estado como de la insurgencia, ofrecería garantías de estabilidad económica, social y de seguridad a los integrantes de las FARC-EP, con el propósito de afianzar la construcción de paz mediante la convivencia y, sobre todo, de la no repetición (Bernal, 2019).

(iv) **Solución a drogas ilícitas**, dado a conocer el 16 de mayo de 2016, en el que se hacía necesario comenzar a dar una nueva visión de este flagelo, desde una perspectiva más integral. En primer lugar, propuso la adecuación de políticas públicas que permitan sustituir los cultivos ilícitos, todo con el acompañamiento de las comunidades campesinas inmersas en esta práctica, comprometiéndolas y entregando asistencia para usar de una forma legal y productiva la tierra y que no sea fuente de financiamiento de actividades delictuales y de terrorismo. Lo

anterior analizado desde un punto de vista constitucional, reivindica la función social de la propiedad y los mandatos ecológicos que ella impone. Por otra parte, el enfoque de salud pública dado al consumo de drogas se centraría en la prevención y la asistencia, a fin de rehabilitar y/o resocializar a todos aquellos consumidores, para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos.

(v) **Víctimas del conflicto**, dado a conocer el 15 de diciembre de 2015 como uno de los temas neurálgicos y que ha producido escozor dentro y fuera de las conversaciones llevadas a cabo. Contempla un Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición compuesto por mecanismos de naturaleza judicial y extrajudicial que permitan lograr la reconciliación, a través del reconocimiento de responsabilidades y, por ende, la consecución de los postulados de Justicia Transicional que se han dado en las experiencias negociadas al fin del conflicto. Este punto ha sido considerado como uno de los centrales y de mayor importancia en el proceso, envuelto en la necesidad de garantizar los derechos de las víctimas a saber la verdad sobre las causas de sus afectaciones y la reparación, más allá de lo material y moral. Cabe aclarar que se ahonda en uno de los mecanismos que lo componen: Jurisdicción Especial para la Paz (Barros et al., 2016).

(vi) Por último, **implementación y verificación**, dado a conocer el 25 de agosto de 2016, tal vez es, aparte de las víctimas, uno de los puntos que demandaría más esfuerzos, pues indica, por un lado, involucrar a toda la sociedad a la construcción de una cultura de paz, crear espacios de participación y de interés por los asuntos públicos a través de los mecanismos contemplados en la Constitución Política, crear un sujeto colectivo que a través de la concientización logre resultados favorables para el individuo y la sociedad. Por otra parte, los esfuerzos de voluntad política, económica y fiscales definirían el rumbo de éxito de la implementación, pues las exigencias acordadas producen un efecto en todos los sectores de la sociedad, la cual solo dependería de la aceptación de esta y la disposición y la capacidad para aportar. Todo lo anterior se realizaría con un fuerte acompañamiento internacional y unas medidas jurídicas excepcionales y transitorias de orden constitucional que permitirían vincular lo acordado.

II. Jurisdicción Especial para la Paz y las Víctimas

Al realizar un análisis esquemático, sociológico y jurídico del contexto que dio lugar al Acuerdo logrado entre el Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC-EP, es pertinente tratar uno de los temas críticos del proceso en el sentido de ser uno de los temas más discutidos y/o debatidos públicamente a través de foros y eventos académicos que se han dado en el marco de las

conversaciones. Además, es un tema vital debido a que es uno de los elementos centrales de las diferentes negociaciones de paz que se han dado no solo en Colombia sino en el mundo, y que recogen una serie de insumos que no pasaron desapercibidos en la aplicación de este componente judicial.

El estudio que se pretende realizar sobre la jurisdicción especial para la paz busca analizar las implicaciones que tiene sobre las víctimas en colombiana con relación a lo acordado en la jurisdicción, con base en los 10 principios, reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidad, la satisfacción de los derechos de las víctimas, la participación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, las garantías de protección y seguridad, las garantías de no repetición, reconciliación y el enfoque de derecho (Jurisdicción Especial para la Paz, Amnistía e Indulto, 2016).

De igual forma, el listado de sanciones y la Ley de amnistía, indulto y tratamientos penales diferenciados que rigen este mecanismo establecido en el Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, desde una perspectiva histórica y académica que aporte al desarrollo del tema.

Es de mencionar que las experiencias tanto nacionales como internacionales de los diferentes procesos de paz que se han llevado a cabo permiten verificar cuáles son esos aspectos que se deben tener en cuenta para la creación de mecanismos independientes judiciales, que permitan, dentro de la transición de la guerra a la paz política, saber de qué manera se pueden aplicar principios efectivos que den lugar al esclarecimiento de la verdad ocurridos con ocasión a los conflictos armados. Se busca conocer las causas y consecuencias de los actos cometidos; la reparación de las víctimas como método para satisfacer sus expectativas de toda índole generadas por el sufrimiento de acuerdo con las dinámicas y las prácticas utilizadas por los diferentes actores; la justicia encaminada a generar sensación de corrección de los actos más atroces dentro de un ambiente de transformación social y política (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2014).

Es necesario comenzar por precisar los conceptos generales en donde tiene asidero el estudio aquí realizado, para después llevar a cabo otro análisis en materia de constitucionalidad y, finalmente, definir las implicaciones de la jurisdicción desde una perspectiva integral para lograr relacionarlas en el contexto actual de la Justicia colombiana (Agudelo, 2018).

II.I. Justicia Transicional: Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición.

A partir de lo desarrollado por Uprimny (2016), en cuanto a la definición de la Justicia transicional:

Hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado a la consecución de la paz. (Uprimny, 2006, p. 13)

Entre tanto, es posible empezar a decantar varios de los principios que se han estipulado en materia de justicia para la aplicación de la jurisdicción especial para la paz. Uno de ellos es la necesidad de crear una institución que coadyuve a la administración de justicia ejerciendo unas funciones específicas dentro del ámbito de su aplicación, es decir, dentro de los procesos de paz. Esta institución se diferencia de las tradicionales por su autonomía y la eficacia que puede derivarse de esta, según el contexto en que se encuentre (Cely, 2019).

Frente a esta primera necesidad, es conveniente traer a colación algunas razones de tipo histórico y jurídico para justificar la creación de organismos judiciales, unos en razón a la situación actual de la justicia, otros debido a la difícil situación económica actual y, por último, en razón a las peticiones que se hagan respecto de las partes en materia de justicia. “Las víctimas piden justicia”.

En primer lugar, se halla el problema orgánico colombiano con lo referente a la profunda crisis que ha tenido la justicia colombiana desde muchos años atrás; inclusive con la promulgación de la actual Constitución Política, se trató de dar una solución al cumulo de procesos que llevaba el sector judicial para esa época, que en palabras de Estanislao Zuleta (2020): “Es tal que solo el 4 por ciento de los casos reciben sentencia y hay acumulados 1.400.000 procesos ...la mayoría de los delitos no son denunciados a las autoridades...” (Zuleta, 2020, p. 166), lo cual confirma que el Estado, en materia de justicia, ha llevado una política ineficaz y que a través de los años ha sido difícil su tratamiento: los altos costos burocráticos que impone llevar a cabo una reforma de la que se ha venido tratando implementar en el país en materia de justicia impide visualizar el beneficio que traería en avance institucional la salida de esta crisis, el clientelismo, la congestión en los diferentes despachos judiciales, la corrupción y los bajos controles que se tiene sobre las actuaciones de los jueces son muchas de las razones para que se mantenga la desconfianza en este sector.

Aunado a lo anterior, la actual situación económica del país en términos de los bajos ingresos que ha percibido el Estado con relación a los precarios precios derivados de la producción de petróleo y la extracción de recursos naturales, la pandemia global que se está viviendo, entre otros factores, agudizaron el déficit fiscal y la balanza de pagos, y como es de imaginarse, incrementó la inflación y se presentó una devaluación de la moneda; pero estos son temas de un estudio más riguroso de otra materia, simplemente para hacer visible unos de los retos que enfrentarían los Estados -en este caso, el colombiano- con relación a la creación de la Jurisdicción y el cumplimiento a las víctimas.

Como aspecto de mayor importancia, son aquellas razones que aducen las partes en las mesas de negociación de cara a la salida de un conflicto armado. De parte de los grupos beligerantes y en concordancia con algunas de las posiciones de los Estados, la creación de tribunales, en este caso transitorios, es propio y necesario, de acuerdo con el desarrollo y la evolución que ha tenido la aplicación de la justicia transicional, para facilitar el tránsito de un statu quo donde se presenta una violación masiva, sistemática y generalizada de Derechos Humanos a uno donde opere la normalidad de la institucionalidad estatal y, por ende, la paz política sea una realidad. Esto con dos objetivos: en primer lugar, para llegar a una verdadera justicia social. Y por parte de los Estados, lo que se busca es que puedan concentrar y especializar a estas jurisdicciones en el tratamiento de los delitos derivados del conflicto armado, y que la actuación de estas no repercuta negativamente en el sistema judicial. Por ejemplo: que no causen una mayor congestión judicial, no propendan a la corrupción en el desarrollo de las investigaciones, y los funcionarios designados tengan experiencia y estén aptos para desarrollar sus tareas para que no obstaculicen los propósitos que se tienen, a saber: obtener verdad, justicia y reparación para las víctimas (Zamora, 2019).

En ese sentido, los mecanismos implementados para llevar a cabo una verdadera justicia transicional conlleva a hacer realidad varias reformas de fondo que implica cambiar paradigmas dentro de los sistemas judiciales, donde el éxito de su aplicación dependerá de la voluntad de las partes en respetar los principios que los rigen y en mayor proporción a la sociedad, quien tiene las responsabilidades de ser observadores y de tener compromiso por reconstruir el tejido social, no concibiendo el logro de la justicia traducido a la aplicación de penas como castigos sino logrando el reconocimiento de la dignidad de las víctimas para que sean partícipes del espacio de ciudadanía con la plenitud de sus derechos (Ramírez, 2016).

Diferentes mecanismos transicionales de justicia que se han dado en el mundo han puesto de presente que la obligación de los Estados al resolver un conflicto armado no debe limitarse a garantizar la seguridad jurídica de los asociados, entiéndase partes en conflicto y sociedad civil, sino que más allá de lograr establecer la confianza en este, se debe procurar la reconciliación de la sociedad a través de esfuerzos ingentes. Estos esfuerzos están enmarcados dentro de las posibilidades de ofrecer verdad, justicia y reparación, y así mismo garantizar que a través de una verdadera catarsis de estos elementos esenciales no se hagan presentes nuevas violencias y no generen la sensación de impunidad y olvido que dejen la puerta abierta a resentimientos y fragmentaciones en las sociedades. Por ello, es imprescindible avocar cada uno de estos elementos fundamentales, para comprender cuál es el objeto de la Justicia Transicional y si estos justifican la aplicación de esta en la medida que afecten las perspectivas de la tradicional Justicia Retributiva.

Ahora bien, la verdad como camino hacia la reconciliación debe entenderse como aquel componente restaurador a las peticiones de los derechos de las víctimas. En otras palabras, saber qué pasó, cómo, cuándo, dónde y por qué sucedieron los hechos de los cuales se generó un dolor; es una forma simbólica de resarcir los sentimientos de zozobra o de ofrecer una especie de paliativo a las expresiones de vejación e ignominia que ponen en peligro el tejido familiar y social de las comunidades más afectadas por la violencia. Tal vez, como lo expresó Giraldo (mamá), “la verdad está referida, por encima de todo, al futuro por construir y que tiene la necesidad de hacer luz intensa sobre ese pasado que nunca más debe repetirse, no sea que nos vuelva a destruir” (Giraldo, 2004, p. 12), se pueden erigir las bases de una sociedad que se reconozca a sí mismo, que reconozca los errores que ha cometido, ya sea por acción u omisión y empiece a transitar por los difíciles caminos de la aceptación de la responsabilidad que se tiene en una sociedad para la restauración de elementos y valores fundamentales, con el objetivo de construir una sociedad más sólida y compuesta.

La verdad es la puerta de la obtención de los temas derechos, como unidad de principios que componen la justicia transicional. “Sin verdad no hay justicia, ni reparación, ni garantía de no repetición. Sin justicia no hay verdad, ni reparación, ni garantía de no repetición. Sin reparación no hay verdad, ni justicia, ni garantías de no repetición” (Araújo, 2016, p. 28). Estos derechos mencionados deben ser correspondientes unos con otros, a fin de lograr la reconciliación de víctimas y victimarios y la reconciliación de estos con la sociedad.

La justicia está concebida, tradicionalmente, como se establece en las normas penales, es decir, de una manera retributiva. La retribución está destinada a ver la operación de la justicia no de otro modo que sea la cárcel. Cabe aclarar que, en procesos transicionales como estos, esta forma de justicia es inviable aplicarla en el sentido en que esta solo es aplicable cuando el Estado a través de su *Ius Puniendi*, se impone sobre su adversario. Por lo general, en este caso “se pide a la prisión que sea “útil”, en el hecho de que la privación de la libertad... ha tenido que ejercer desde el comienzo, un papel técnico positivo, operar transformaciones sobre los individuos” (Foucault, 2002, p. 286), pero hoy en día la experiencia ha demostrado otros resultados distintos a la superación de la criminalidad del delincuente en las prisiones. De otro lado, se hace énfasis en aplicar un modelo de justicia propio de los procesos de paz, que han dado paso a cambiar la visión que se tiene sobre la justicia. Se trata de la llamada justicia restaurativa el cual permite crear condiciones efectivas para lograr el reconocimiento de responsabilidades, a partir del grado de verdad y de reparación que los victimarios ofrezcan.

En términos de reparación, se debe acudir a ampliar este concepto, pues ya no se trata de reparar, no solo económicamente a la víctima por el daño causado, sino a la vez de lograr una reparación moral que transforme la mirada de la víctima de su situación de otra manera. A esto se le ha denominado reparación transformadora, las cuales deben:

Ser comprendidas no solo como un instrumento para saldar cuentas con una injusticia que ocurrió en el pasado, sino como una oportunidad de impulsar un mejor futuro. ...verlas como una oportunidad, modesta pero no despreciable, de avanzar a una sociedad más justa y de superar situaciones de exclusión y desigualdad... (Uprimny y Guzmán, 2010, p. 253)

Por último, las garantías de no repetición hacen parte del proceso de reparación hacia la sociedad, en la que se adopten estrategias legítimas para evitar la proliferación de nuevas violencias, esto, a través de medidas de prevención, derivadas ya sea de políticas públicas originadas con ocasión a la terminación de los conflictos o de aplicación de litigio estratégico, o voluntad política de todos los llamados a hacer parte la creación de mejores condiciones de vida.

La efectividad de las garantías de no repetición está dada por la asistencia que el Estado les ofrece a las personas que han estado involucradas en un conflicto armado desde la ilicitud, pues en concordancia con el compromiso adquirido en garantizar los derechos tanto de víctimas como de victimarios dependerá evitar el surgimiento de nuevos actos delictivos. Entonces, la manera

en que el Estado puede evitar un nuevo levantamiento en armas u otros actos insurgentes y hacer efectivos los derechos de ambos actores en el conflicto armado es brindándoles confianza a estos y asegurándoles la seguridad económica y jurídica a las dos partes. Al hablar de la confianza jurídica se hace referencia a la aplicación de las amnistías e indultos en las que en el marco del derecho internacional de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario les dan pautas a los países y el cual se desarrolla ampliamente en el siguiente capítulo.

III. Fundamentos Constitucionales: implementación jurídica del Acuerdo Final para la Paz

Realizado el bosquejo necesario referido a la Jurisdicción Especial para la Paz, ahondando en el rol clave que desempeña la justicia para el cumplimiento efectivo de los compromisos adquiridos con las víctimas, se destacan varios elementos esenciales de la Constitución Política de Colombia en lo referente a la aplicación de los 75 puntos que componen y crean la Jurisdicción como la puesta en marcha de la Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales (Ley 1820 de 2016).

En primer lugar, se resalta la necesidad de lograr una compatibilidad en la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz con los principios y valores consagrados en la Constitución tanto como los principios referidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Uno de sus objetivos se enmarca en la consecución de lograr establecer una paz estable y duradera a través de una política de reconciliación nacional que fue, precisamente, uno de los pilares de la Asamblea Nacional Constituyente del año 1991; por esa razón, se afirma que una exitosa construcción de la paz estará garantizada en la medida en que el Estado adquiera los elementos necesarios para consolidarla, siendo este uno de los puntos más neurálgicos, pero también depende de la actuación y el aporte a la construcción de la paz que haga la guerrilla FARC-EP y la sociedad civil.

Si bien es cierto que Colombia ha sido un país referente en los temas de aplicación de Justicia Transicional debido a su histórica e infortunada experiencia en conflictos armados, la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz parte desde el sentido de evitar los errores cometidos en procesos anteriores, no solo del ámbito nacional sino también internacional, y en ese sentido, lo acordado trata de buscar un acople necesario a las normas a fin de evitar incongruencias e incompatibilidades constitucionales que puedan dejar en riesgo la seguridad jurídica de quienes

participen en ella. Sin embargo, hay cuestiones que se prestan para dejar vacíos y permitir que sean objeto de futuras frustraciones al implementarse.

A fin de subsanar dichos vacíos, en el acuerdo se propuso fortalecer los principios que han sido consagrados en la Carta Política colombiana, estos son:

Fortalecer la unidad de la nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad latinoamericana.
(Constitución Política de 1991, preámbulo)

Estos principios reflejan la voluntad de las partes de obtener un soporte significativo en la aplicación de este mecanismo de justicia transicional. Por otra parte, traer a colación figuras jurídicas de carácter internacional y reconocer la vigencia de los tratados que han sido ratificados por el Estado colombiano -en especial los atinentes a Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario- evidencia un compromiso por generar confianza Jurídica y, al mismo tiempo, un llamado de asistencia que permita obtener referentes confiables cuya efectividad haya sido probada en otras experiencias similares para tender a una administración de justicia eficaz en el marco del Acuerdo de Paz (Ley 1957 de 2019).

Sin embargo, al erigir estos principios como referentes dogmáticos de la nueva Jurisdicción se hace necesario revisar el aspecto orgánico que, en parangón con la Constitución, puede eludir varias normas constitucionales y legales destinadas a ser ejercidas, en este caso, por una de las ramas del poder público, la rama judicial y por ende afectaría la estructura del Estado. Esto en relación con la creación de varios órganos como salas y unidades de investigación y acusación que harían que se sustituyera la institucionalidad existente y ponga en tela de juicio la funcionalidad de estas en relación con la competencia actual que se tiene sobre procesos por las distintas conductas punibles con ocasión al conflicto armado.

En varios de los principios acordados se establece el papel de esta Jurisdicción, la cual no puede tener superioridad sobre los procesos que se estén llevando a cabo a miembros de las FARC-EP, ni sobre decisiones que ya han sido proferidas por las Jurisdicciones de la rama judicial desconociendo, tal vez, la competencia que tuvieron frente al juzgamiento, la sanción o la investigación de las conductas punibles cometidas por el grupo insurgente en cabeza de las diferentes instituciones destinadas a esta labor. También se contempla que esta no puede tomar

atribuciones de un modo exacerbadas para expedir normas de carácter sustancial y procedimental, con el propósito de llevar a cabo los resultados de justicia que se hagan exigibles en el desarrollo de su aplicación. Lo anterior podría ser visto de un modo negativo, sin embargo, el correcto proceder de las partes y de los designados para integrar esta jurisdicción, definirá el rumbo de éxito que pueda llegar a tener en materia de orden constitucional, sin perjuicio de las implicaciones políticas, sociales y económicas que más adelante se exponen.

Respecto de las sanciones contempladas, es válido afirmar que, si bien en el marco de la justicia transicional en Colombia se acordó una reducción de penas por delitos cometidos en el desarrollo de las prácticas de guerra -exceptuando los crímenes de lesa humanidad- con un enfoque mixto de Justicia Restaurativa y Justicia Retributiva, no se lograría obtener verdad, justicia y reparación si no se determina cuál va a ser la ruta de seguimiento de todos los involucrados con el fin de no dilatar los principios que componen dicha Jurisdicción y, sobre todo, los consagrados en la Constitución Política y los contenidos en el Bloque de Constitucionalidad.

Para amnistiar e indultar la Jurisdicción Especial para la Paz debe atender lo dispuesto en la Carta Política de 1991 en el Título VI, Capítulo III, Artículo 150, numeral 17, donde se consagra el otorgamiento de ambos mecanismos por delitos políticos:

Conceder, por mayoría de los dos tercios de los votos de los miembros de una y otra Cámara y por graves motivos de conveniencia pública, amnistías o indultos generales por delitos políticos. En caso de que los favorecidos fueren eximidos de la responsabilidad civil respecto de particulares, el Estado quedará obligado a las indemnizaciones a que hubiere lugar.

En el Título VII, Capítulo II, Artículo 201, numeral 2 trata lo concerniente a los indultos, “conceder indultos por delitos políticos, con arreglo a la ley, e informar al Congreso sobre el ejercicio de esta facultad. En ningún caso, estos indultos podrán comprender la responsabilidad que tengan los favorecidos respecto de los particulares” (Constitución Política, 1991. Arte- 3. 5).

Con respecto a lo anterior y con base en el acuerdo final, el acuerdo no incluye delitos diferentes a los contemplados en la Constitución que puedan ser amnistiables o indultables; es decir, los delitos políticos de rebelión, sedición, asonada, conspiración y seducción, usurpación y retención ilegal del mando. El debate jurídico será entonces en torno al establecimiento de los delitos conexos.

“Algunos delitos comúnmente determinados conexos con la rebelión y la sedición son el porte ilegal de armas y utilización de elementos de uso privativo de las Fuerzas Armadas...” (Observatorio de Paz y Conflicto, 2016, p. 3), no obstante, según el artículo 15 contemplado en el Anexo I Ley de Amnistía, Indulto y Tratamientos Penales Especiales, la conexidad se extiende a cerca de 33 delitos, unos con graves implicaciones para la determinación objetiva de los delitos de lesa humanidad, pues algunas de ellas pueden no corresponder al principio de conexidad unido a los delitos políticos y tornaría complicada la aplicación de penas de verdaderos responsables de delitos en mayor medida, tentativos a la humanidad.

III.I Amnistía e indultos, y amnistía en las escuelas positivistas, marco jurídico internacional y constitucional

Para comenzar a desglosar y conocer el alcance de los mecanismos de las amnistías e indultos y su correcta aplicación tanto a nivel internacional, enmarcados en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, así como a nivel nacional bajo los preceptos constitucionales de nuestra Carta Política de 1991, es necesario definir estos dos conceptos que tanto se han relacionado e incluso hecho sinónimos de impunidad (Moreno, 2012).

La amnistía a nivel mundial, en su uso común del derecho internacional, se ha entendido, en palabras de Sánchez (2016), “amnistía se usa como un término genérico para cualquier medida que busque evitar que un delito o autor sea procesado” (párr. 7). En Colombia, se da un uso más acotado del término, esto es, en palabras del mismo autor “... la no iniciación o la cesación del procedimiento en curso, pero en donde todavía no se ha dado una condena” (Sánchez, 2016, párr. 9).

La *Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos* presenta una definición mucho más precisa en cuanto a amnistías se refiere, como se ha visto en este documento, la amnistía en un término más estricto es “la posibilidad de impedir el enjuiciamiento penal y, en algunos casos, las acciones civiles contra ciertas personas o categorías de personas con respecto a una conducta criminal específica cometida antes de la aprobación de la amnistía” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p. 5).

Ahora bien, para tener una visión mucho más amplia y concisa es preciso entenderse en las características de la amnistía, que es lo que convierte a esta figura en una herramienta tan cuidadosamente utilizada; primeramente es una medida que no se aplica a cualquier grupo de individuos o en cualquier tiempo y lugar, tiene unas características especiales que deben ir enmarcadas en un período de tiempo determinado y/o que implica una circunstancia específica, en el caso de Colombia se estaría haciendo referencia al conflicto armado con las FARC-EP .

“Las amnistías por regla general especifican una categoría o categorías de beneficiarios, como los miembros de las fuerzas rebeldes, los agentes estatales o los exiliados políticos” (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p. 7)¹⁰, en este enunciado se puede observar que se incluyen los “*agentes estatales*”, a este respecto se hace referencia a que los agentes del Estado obtendrán los mismos beneficios que se les darían a las filas de las FARC-EP en el proceso de paz.

El expresidente Juan Manuel Santos afirmó “que obtendrían los mismos beneficios que obtuviera el enemigo en el proceso de paz” (Diario El Tiempo, 2015, párr. 6) y que el tratamiento “será simétrico en unos aspectos, diferenciado en otros; pero siempre equitativo. Equilibrado y simultáneo” (Decreto Ley 706, 2017, preámbulo). Así pues, queda claro que la fuerza pública también entraría en la Jurisdicción Especial para la Paz (América Tevé, 2015)¹¹.

El Derecho Internacional, junto con la política de las Naciones Unidas, han recogido y unido distintas fuentes de este marco internacional respecto a las amnistías para crear un conjunto de normas que permita conceptualizar aquellos casos en los que la amnistía no es aplicable, estos son:

- a) Impiden el enjuiciamiento de personas que pueden resultar penalmente responsables de crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves de derechos humanos, incluidos los delitos que afecten concretamente a la mujer y la violencia de género;
- b) Interfieren con el derecho de las víctimas a un recurso efectivo, incluida la reparación, o
- c) Limitan el derecho de las víctimas y las sociedades a conocer la verdad acerca de las violaciones de derechos humanos y del derecho humanitario. Además, las amnistías que procuren restaurar los derechos humanos deben estar formuladas con miras a velar por no limitar los derechos restaurados ni perpetuar en algún sentido las violaciones

iniciales. (Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, 2009, p. 11)

Cabe aclarar que el indulto no es sinónimo de amnistía y mucho menos de impunidad, como se evidencia a continuación. “El indulto hace referencia al perdón judicial de quien ya ha sido condenado, incluyendo a quienes puede haber ya pagado parte de la sanción y se les ha perdonado el cumplimiento del resto” (Sánchez, 2016, párr. 9). Este, según la OACNUDH (2009), es “un acto oficial que exime a un delincuente o delincuentes condenados de la aplicación de la pena en todo o en parte, sin borrar la condena en que se basa” (p. 5).

Ahora bien, en materia internacional el uso de la amnistía y el indulto se encuentran consagrados en el Protocolo II, adicional a los convenios de Ginebra debidamente ratificados por Colombia, el cual establece lo siguiente en el artículo 6.5:

A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder procuraran conceder la amnistía más amplia posible a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentre privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado. (Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR], 1998, art. 6, num. 5)

Como se evidenció, no son amnistiabiles ni indultables aquellos crímenes en los que se cometen graves violaciones de los derechos humanos como los crímenes de guerra, el genocidio y los crímenes de lesa humanidad. Se lleva a cabo un mini *room tour*, breve recorrido sobre las conductas que se consideran parte de alguna de estas categorías de delitos.

Según el artículo 3, común en las Convenciones de Ginebra, las conductas que se consideran como crímenes de guerra son:

- a) Los atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, la tortura y los suplicios;
- b) La toma de rehenes;
- c) Los atentados contra la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes.
- d) Las condenas dictadas y las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados (CICR, 1949).

En el ordenamiento nacional se debe precisar que la amnistía y el indulto solo son aplicables a la categoría de “Delitos Políticos”, la cual a su vez contiene unas subcategorías, a saber, los

delitos conexos al delito político, los delitos que pueden considerarse en el marco y en relación con el conflicto armado y los delitos comunes.

Así, para determinar los delitos conexos al delito político no basta con remitirse a los delitos internacionales, pues hay conductas que, aunque desarrolladas durante y con ocasión al conflicto armado, están tipificadas tanto a nivel nacional como internacional por fuera del ámbito del conflicto. Un claro ejemplo es el narcotráfico, el cual, si se diera el caso de considerarse conexo al delito político y, por tanto, sus responsables fueran acreedores de amnistías o indultos, a nivel internacional, se tendrían que surtir escollos normativos.

Aplicado al caso anterior, Colombia firmó y ratificó la Convención de Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas de 1988, y se halla específicamente el artículo 3, numeral 10, que reza lo siguiente:

A los fines de la cooperación entre las Partes prevista en la presente Convención, en particular la cooperación prevista en los artículos 5, 6, 7 y 9, los delitos tipificados de conformidad con el presente artículo no se considerarán como delitos fiscales o como delitos políticos ni como delitos políticamente motivados, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales y de los principios fundamentales del derecho interno de las Partes. (Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC], 1988, art. 3, num.10)¹⁶

Aunque este documento no ingresa al bloque de constitucionalidad, es preciso señalar que de la firma y ratificación de esta Convención se derivan una serie de obligaciones internacionales que los gobiernos deben cumplir, aunque sea por buen nombre del Estado y la Nación.

En cuanto al delito político, no hay una definición inequívoca, la cual establezca qué se puede considerar como tal y qué no en el ordenamiento nacional, más específicamente en el Código Penal (Ley 599 del 2000), donde se establecen unas conductas conexas al delito político, estas son, *Rebelión*. Artículo 467. *Sedición*. Artículo 468. *Asonada*. Artículo 469. *Conspiración*. Artículo 471. *Seducción, usurpación y retención ilegal del mando*. Artículo 472.

Dicho esto, es posible comenzar a develar cómo está estructurado el mecanismo de amnistías e indultos en la JEP, “basados siempre en la claridad, imperativa y unánime, de que los crímenes internacionales no pueden ser objeto de estas medidas” (Travesí y Rivera, 2016, p. 16),¹⁷ y otra idea fundamental es la de que “los delitos políticos son susceptibles de perdón por la vía del indulto (perdón de la pena) o amnistía (perdón del delito)” (Portafolio, 2007)¹⁸.

Tomando en cuenta las acotaciones anteriores, de acuerdo con el JEP, no hay lugar a contradicciones o violaciones del derecho internacional humanitario, así lo confirmó la fiscal de la Corte Penal Internacional Fatou Bensouda en un comunicado:

[Donde]...respaldó el contenido del acuerdo, incluida la Jurisdicción Especial para la Paz. La fiscal reconoció tres elementos claves de lo pactado. 1) Que el Estado colombiano ha afirmado su determinación para poner fin a la impunidad de los crímenes más graves. 2) Se declaró satisfecha de que el texto final excluya amnistías e indultos para crímenes de lesa humanidad y de guerra. 3) Afirma que el acuerdo de paz les da un lugar central a las víctimas. (Revista Semana, 2016, párr. 1)

El mencionado componente de justicia está integrado por un órgano que se encarga de definir lo referente a las amnistías o a los indultos, según la variación de los casos, y otro que los toma como objeto de estudio e indica que hacen parte de la sala de amnistías o indultos.

También, dado que realizan otro tipo de funciones que de alguna forma pueden relacionarse, existe la Unidad de Investigación, la cual debe satisfacer el derecho a las víctimas a la justicia cuando haya reconocimiento colectivo o individual de la responsabilidad. Asimismo, la Jurisdicción Especial para la Paz cuenta con la Sala de Reconocimiento de Verdad, Responsabilidad y Determinación de Hechos y Conductas; el Tribunal para la Paz; y la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, para dar solución a aquellos casos que son diferentes a los contemplados o no previstos en otros superpuestos, nombrados por accesión al tema que se planteó.

Por otra parte, para relacionar y ordenar los indultos y amnistías en los cuales se abordaron en detalle, las doctrinas filosóficas ocupan un lugar especial en los textos académicos de este tipo, en el sentido de que relacionan los aportes con las escuelas positivistas. Igualmente, en la búsqueda de la participación y la representación democrática como lo expone Bobbio cuando se refiere a la validez de justicia (Bobbio, 1999).

Ahora, no solo en las teorías como las de Bobbio se halla relación sino también en las escuelas positivistas alemanas que primero estudiaba a través de teorías y disertación construida en discursos, posterior a la creación de normas y leyes justo como se realizó en el periodo comprendido entre el 2012 y el 2016 buscando inclusión de las víctimas a la justicia, un estudio juicioso de las ventajas y retos a superar hasta llegar a la creación de leyes que impulsen la aplicación y concurrencia en nuestra normatividad.

IV. Implicaciones en la justicia respecto a las víctimas del conflicto entre los años 2012 y 2016 y reflexiones finales

Acorde con el análisis legal y constitucional realizado sobre el punto referente a la justicia del Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera, las implicaciones y las conclusiones obtenidas apuntan a hacer visible el cambio de paradigma de aplicación de la Justicia en tiempos de posconflicto y en otro sentido a saber cómo influye la Jurisdicción Especial Para la Paz en todos los ámbitos de la nación, es decir, el social, político, el económico y, en mayor medida, el jurídico (Chávez et al., 2016; Martínez y Cubides, 2016).

En el ámbito social se observan dificultades e incertidumbre respecto a la aplicación de justicia porque gran parte de la sociedad lo ve como un acto de impunidad. Muchos consideran que ello puede significar la evasión de la justicia por parte de miembros de las FARC-EP, un eventual no reconocimiento de la verdad de los actos cometidos en el marco del conflicto armado y no admitir la responsabilidad que tuvieron, lo que trae como consecuencia la no reparación y tal vez la repetición de emergentes violencias. De esta forma, se debe enfatizar en el trabajo coordinado de la Jurisdicción con la Comisión de la Verdad para que los indultos y las amnistías otorgados se den con todas las garantías, y reconstruir el tejido social construyendo una memoria histórica profunda que permita analizar y cohesionar las distintas miradas del conflicto para que la sociedad comprenda lo acaecido en el conflicto.

En el ámbito político aún se duda acerca de la elegibilidad política que puedan tener los responsables de crímenes de lesa humanidad, sin establecer, ni dejar claro, una hoja de ruta y de requisitos frente a las exigencias de justicia que se deban cumplir para quienes deseen hacer efectivo su derecho a elegir y ser elegido no dejen cuentas pendientes con la justicia y con la reparación efectiva de las víctimas.

En lo que respecta a lo económico, se evidencia una alta carga que le corresponde al Estado disponer en cumplimiento de su deber de atender los derechos de las víctimas, a diferencia de los compromisos correspondientes al grupo insurgente, el cual solo hace mención tomando en cuenta las sanciones que la Jurisdicción pueda imponer a sus miembros y, por tanto, produciría más desconfianza de la ya habida, generando escepticismo sobre los recursos en manos de las FARC-EP y su destinación. Por otra parte, la puesta en funcionamiento de la Jurisdicción demanda un crecimiento burocrático tal y como está contemplado, que al parecer estaría compuesto por entre

2000 a 3000 funcionarios, es decir, cerca de dos billones de pesos, aunado a la imposibilidad de conocer por cuanto tiempo funcionará sin lograr establecer una sostenibilidad fiscal tanto para esta como para la implementación del acuerdo en general.

Por último, con mayor importancia, aunado a las implicaciones legales y constitucionales, hay elementos de orden jurídico en general que no permiten ofrecer claridad sobre los objetivos propuestos en la Jurisdicción que satisfagan los principios de la Justicia transicional y los derechos de las víctimas. La Jurisdicción organiza una especie de renovación judicial, de una forma paralela y autónoma justificada en la aplicación de la justicia transicional, cuando se ha demostrado que esto tiene hondas repercusiones dentro de la estructura del Estado, máxime cuando tiene un componente internacional. También deja de lado el procedimiento que debe tener cada una de las salas de acuerdo con las situaciones que se vayan presentando y cómo debe ser su proceder en los casos en los que no se acepten responsabilidades, por lo que es necesario un protocolo de seguimiento a las actuaciones de quienes integren la Jurisdicción y de sus capacidades intelectuales, morales y de discernimiento ya que esto se evidencia como necesario.

Ahora bien, una vez aprobada las disposiciones sobre la Amnistía por parte del Congreso de la República, los cuales explican la forma en que se integraran los delitos cometidos por grupos al margen de la ley y los conexos contemplados. Aún no es claro, respecto a las penas para delitos de lesa humanidad cuáles son los métodos de aplicación de la justicia frente a los graves delitos cometidos y la naturaleza de las sanciones, por lo que estos vacíos y dudas han ido resolviéndose en la implementación, a través de la pedagogía empleada, la regulación o la profesionalidad y sensatez de quienes conforman la Jurisdicción.

Así pues, al comprender el conflicto desde el punto de vista de las víctimas se debe analizar si lo estipulado entre los años 2012 y 2016, en cuanto a los derechos humanos de las víctimas y la verdad, genera un contenido sustancioso que soporta la reivindicación de los derechos de quienes han sido afectados por el conflicto armado y cuya solución política llegue a conseguir que se cumplan los principios.

Del mismo modo, con base en este contenido generado, se espera que se puedan cumplir los objetivos en la justicia que satisfagan a las víctimas, y los autores materiales e intelectuales rindan cuentas de sus hechos y asuman sus culpas. Ahora bien, que no se repitan en las regiones los hechos ocasionados a las víctimas, que según lo acordado se mantenga la seguridad jurídica.

En materia de legalidad la sociedad colombiana debe seguir los pasos de la convivencia y la reconciliación para apoyar lo planteado en este contexto histórico. Así, verdaderamente, se podrá beneficiar y reparar a las víctimas que han sido golpeadas por la violencia en el país, tanto para las que han sido sujetos directos e indirectos de las prácticas violentas en el marco del conflicto armado como todo el pueblo colombiano que por años ha escuchado su clamor, atiende su dolor y escucha la voz de aquellos hermanos que necesitan una mayor atención y solidaridad.

El estudio de los planteamientos que se realizaron durante los años 2012 al 2016 muestra un panorama poco alentador para las víctimas en cuanto al cumplimiento ya que por errores previsibles, no pactados se está dificultando los procesos los cuales puedan llegar a incurrir en afectaciones graves como en la revictimización; el ambiente actual es de aceptación de un camino que se tornó de un destino lento pero que se debe llevar a un feliz puerto, como se propusieron en las implementaciones propuestas. En cuanto a los logros, se pretende construir un país fundado en la dignidad y justicia de todas las personas, pero especialmente para la víctimas.

V. Conclusiones

Con respecto a la aplicación que el aparato judicial debe garantizar respecto al reconocimiento de las víctimas, se pueden catalogar como la participación, esclarecimiento de la verdad, reparación, garantías de protección y seguridad. Asimismo, el aparato judicial debe garantizar unos mínimos, los cuales debe ocuparse de los asuntos señalados para el continuo avance de la aplicación de justicia, a fin de evitar circunstancias desesperanzadoras para los actores del conflicto armado en Colombia. De esa manera, se ha logrado avanzar parcialmente con los objetivos propuestos después de la firma de los acuerdos, es evidente que aún no se cumplen los fines planteados.

Es importante aclarar que el presente documento analiza los tópicos desde la óptica constitucional, el cual define las implicaciones de la jurisdicción especial para la paz desde una perspectiva integral y sus relaciones con la justicia actual. Por lo tanto, es importante mencionar que, desde la posición de las víctimas, se deben afrontar parámetros planteados que no se logran ajustar de forma satisfactoria. Así las cosas, los temas con mayor dificultad se relacionan con la justicia para las víctimas toda vez que estos asuntos son trascendentales para el entendimiento y desarrollo de políticas que, a su vez, permitan a los involucrados enmendar hechos de verdad, justicia, reparación y no repetición (Suárez, 2017).

Además, se evidencia el desarrollo de la Justicia transicional, aunque en su literalidad permite solucionar de fondo situaciones coyunturales del conflicto armado en Colombia en relación con las víctimas, se requiere hacer mención a los problemas orgánicos que se pueden generar. En materia de congestión en la justicia, verbigracia, se busca la diligencia de los procesos que involucran a los intervinientes en estas controversias. Por otro lado, hay que ser enfático en los manejos judiciales que faciliten hechos de corrupción en el desarrollo de las investigaciones.

Ahora bien, no es una falacia pensar que la voluntad de las partes en la recuperación del tejido social puede conllevar a una clara reconciliación de toda la nación; igualmente, sirve como modelos futuros en procesos nacionales o mundiales. La reparación no solo puede brindarse con retribuciones económicas, sino también de una forma moral, de modo que la verdad como camino a la reconciliación y la efectividad sería dada por la no repetición de los hechos. Aunque, para que estos componentes se presenten, hay que considerar la confianza jurídica que hace referencia a la aplicación de las amnistías e indultos.

Para concluir, a partir de los argumentos expuestos, se reitera que las víctimas no son solo las personas que tuvieron sucesos que, de formas subjetivas, arremetieron contra su dignidad y formas de vida, sino que también este concepto alude a cualquier persona indeterminada que en su entorno diario se encuentre en lugares donde haya presencia de situaciones anormales a las civilizadas. Una situación en la que, debido a las fallas del Estado para garantizar medidas de convivencia pacíficas para resolver desde lo fundamental, se produzcan circunstancias que afectan el territorio. Lo anterior se puede señalar en que son derechos positivos expresados en el preámbulo de la Constitución Política como voluntad democrática; de ahí que sean exigibles por todos los ciudadanos colombianos.

Referencias bibliográficas

- Agudelo, Ó. A. (2018). *La pregunta por el método: derecho y metodología de la investigación*. Editorial Universidad Católica de Colombia.
- Alvarado, S. V., Rueda, E. A., y Gentil, P. (2016). *Paz en Colombia: perspectivas, desafíos, opciones*. Clacso.
- Alvis, L. E. (2019). *Análisis del carácter complementario del proceso de reparación de las víctimas en Colombia (Ley 975 de 2005) y el adelantado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. [Trabajo de grado]*. Universidad Católica de Colombia.

- América Tevé. (2015). *Colombia: detallan justicia aplicable a la fuerza pública*.
<https://www.americateve.com/colombia-detallan-justicia-aplicable-la-fuerza-publica-n890468>
- Araújo, J. (2016). *La sociedad civil mira la paz*. Editorial Gente Nueva.
- Asamblea Nacional Constituyente. (1991). Constitución Política de Colombia. Gaceta Constitucional No. 116 de 20 de julio de 1991. Bogotá, D.C., Colombia.
- Barros, J., González, A., y Isaza, L. (2016). *La Justicia Transaccional como herramienta para la paz en Colombia*. Instituto Latinoamericano de Altos Estudios.
- Bernal, C. A. (2019). La guerra y sus víctimas. *Opción: Revista de Ciencias Humanas y Sociales*, 35(25), 236-281.
- Bobbio, N. (1999). *El problema del positivismo jurídico, traducción de Ernesto Garzón*. Fontamara.
- Cely, C. A. (2019). *El conflicto armado en Colombia, la justicia transicional y la idea del velo de ignorancia de John Rawls. [Trabajo de grado]*. Universidad Católica de Colombia.
<https://hdl.handle.net/10983/24379>
- Centro Nacional de Memoria Histórica. (2014). *Derecho penal y guerra. Reflexiones sobre su uso*. CNMH.
- Chávez, E., Cubides, J. A., Dizdarevic, A. S., Gaitán, I. M., Guío, R. E., Martínez, A. J., . . . Wabgou, M. (2016). *Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia*. Universidad Católica de Colombia.
- Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR]. (1949). *Artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra*. <https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/treaty-gc-0-art3-5tdlrm.htm>
- Comité Internacional de la Cruz Roja [CICR]. (1998). *Protocolo II adicional a los Convenios de Ginebra de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional*. <https://www.icrc.org/spa/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm#3>
- Congreso de la República de Colombia. (2000). Ley 599 del 24 de julio del 2000. Diario Oficial No. 44.097. [Por la cual se expide el Código Penal]. Bogotá, D.C., Colombia.
- Congreso de la República de Colombia. (2005). Ley 975 del 25 de julio de 2005. Diario Oficial No. 45.980. [Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de

- grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz...]. Bogotá, D.C., Colombia.
- Congreso de la República de Colombia. (2016). Ley 1820 del 30 de diciembre de 2016. Diario Oficial No. 50.102. [Por medio de la cual se dictan disposiciones sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales y otras disposiciones]. Bogotá, D.C., Colombia.
- Congreso de la República de Colombia. (2019). Ley 1957 del 6 de junio de 2019. Diario Oficial No. 50.976. [Estatutaria de la Administración de Justicia en la Jurisdicción Especial para la Paz]. Bogotá, D.C., Colombia.
- Diario El Tiempo. (2015). *Uribe insiste en que Gobierno iguale a militares con guerrilleros*. <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16464979>
- Foucault, M. (2002). *Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI Editores.
- Fundación Internacional Baltasar Garzón. (2016). *El Quinto Acuerdo de La Habana*. FIBGAR.
- Giraldo, S. J. (2004). *Búsqueda de Verdad y Justicia: Seis experiencias en posconflicto*. Editorial Anthropos.
- Jurisdicción Especial para la Paz, Amnistía e Indulto. (2016). *Cartilla Para Prisioneras y Prisioneros Políticos*. JEP.
- Martínez, A. J., y Cubides, J. (2016). Medidas de inclusión para una paz duradera. En T. Vivas, *Derechos humanos, paz y posconflicto en Colombia* (págs. 127-154). Universidad Católica de Colombia.
- Moreno, M. C. (2012). *Atención integral a las víctimas del desplazamiento: diagnóstico de la aplicación del plan integral único de Fusagasugá (atención de niños, niñas y adolescentes)*. [Tesis de maestría]. Universidad Católica de Colombia.
- Observatorio de Paz y Conflicto. (2016). *Amnistía e indulto*. Universidad Nacional de Colombia.
- Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito [UNODC]. (1988). *Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas*. Naciones Unidas.
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos [OACNUDH]. (2009). *Instrumentos del Estado de Derecho para sociedades que han salido de un conflicto*. Naciones Unidas.
- Portafolio. (2007). *El imperio de la confusión*. <https://www.portafolio.co/economia/finanzas/imperio-confusion-407868>

- Presidencia de la República de Colombia. (2017). Decreto Ley 706 del 3 de mayo de 2017. [Por el cual se aplica un tratamiento especial a los miembros de la Fuerza Pública en desarrollo de los principios de prevalencia e inescindibilidad del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación...]. Bogotá, D.C., Colombia.
- Ramírez, M. A. (2016). *Justicia transicional y garantía de derechos de las víctimas: lecciones desde los tribunales penales internacionales a la transición colombiana. [Trabajo de grado]*. Universidad Católica de Colombia.
- Revista Semana. (2016). *La luz verde de la CPI al proceso de paz*.
<http://www.semana.com/nacion/articulo/corte-penal-internacional-se-declaro-satisfecha-con-el-acuerdo-final-entre-gobierno-y-farc/492263>
- Sánchez, N. C. (2016). *Postconflicto en Colombia (18) Amnistías e indultos en el proceso de paz*.
<https://www.opendemocracy.net/es/postconflicto-en-colombia-18-amnist-as-e-indultos-en-el-proc/>
- Suárez, C. (2017). *Jurisdicción especial para la paz: un reto frente a la participación de las víctimas. [Tesis de grado]* . Universidad Católica de Colombia.
- Travesí, F., y Rivera, H. (2016). *Delito político, amnistías e indultos*. ICTJ.
- Uprimny, R. (2006). *¿Justicia transicional sin transición?* DeJuSticia.
- Uprimny, R., y Guzmán, D. (2010). En búsqueda de un concepto transformador y participativo para las reparaciones en contextos transicionales. *International Law, revista colombiana de derecho Internacional*, (17), 231-286.
- Zamora, S. (2019). *La comisión para el esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición: Escenario de reparación simbólica para las víctimas mediante la búsqueda de su dignificación. [Trabajo de Grado]*. Universidad Católica de Colombia.
- Zuleta, E. (2020). *Colombia: Violencia, democracia y derechos humanos*. Editorial Planeta Colombiana.